

**Honorable Magistrado(a):**  
DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA – SALA LABORAL**  
**E.S.D**

**RADICADO:** 11001310503220220015401  
**DEMANDANTE:** MARIA CONSUELO MONTES DE ALZATE  
**DEMANDADO:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –  
COLPENSIONES Y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES  
Y CESANTIAS PORVENIR S.A

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**LAURA NATALIA GUERRERO VINCHIRA**, mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.014.208.534** de **Bogotá** portadora de la T.P. No. **305.872** del C.S. de la J, obrando en mi condición de apoderada judicial Sustituta de la Administradora Colombiana de pensiones – COLPENSIONES- Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial vinculada al Ministerio de Trabajo de conformidad con el poder de sustitución a mi conferido, me permito indicar lo siguiente:

Encontrándome dentro del momento procesal oportuno me permito reiterarme en cada uno de los puntos sustentados tanto dentro de la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión presentados en las instancias procesales pertinentes, solicitándole se revoque el fallo proferido por el juez 32° laboral del circuito, toda vez que en el presente caso no existen elementos que evidencien vicios del consentimiento o dolo que permitan declarar la ineficacia de la afiliación realizada por la demandante ante la A.F.P Porvenir S.A en el año 2005, en tanto obra como soporte de dicha afiliación las cotizaciones efectuadas por la demandante de manera libre, voluntaria y espontanea, por lo que se tiene que dicha afiliación es eficaz y produce pleno efecto jurídico entre las partes, en tanto obra como soporte de dicha afiliación las cotizaciones efectuadas por el demandante de manera libre, voluntaria y espontanea, por más de 20 años, así como la firma del formulario de afiliación que acredita la aceptación voluntaria, libre y sin presión del demandante de construir pensión en un fondo privado, medio consenso sobre la información ofrecida, las condiciones y características del RAIS.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la demandante realizó aportes por más de 20 años bajo este régimen y no se observa ninguna solicitud de re-asesoría en relación a duda manifiesta de este régimen; al igual su señoría se observa que la nulidad no se alegó dentro del término a que se refiere el artículo 1750 del Código Civil, norma que señala que el plazo para pedir la rescisión durará cuatro años, los cuales se contarán, en el caso de error o de dolo desde el día de la celebración del acto o contrato 4 años, que es un lapso más que suficiente para estar de acuerdo y conforme con el contrato realizado, y aún más cuando se confirma que se recibieron los extractos por parte de las AFP los cuales señala la demandante en el interrogatorio de parte, indicando que los revisaba y entendía los valores aportados.

Aunado a lo anterior, no debe olvidarse que la afiliación es un contrato bilateral en el cual se establecen obligaciones reciprocas entre esas Decreto 2241 de 2010 en el que el afiliado debe informarse con anterioridad a la afiliación.

Así mismo su señoría, no debe perderse de vista que el artículo 167 del C.G.P indica como regla general *"que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe"*. Sin embargo, en el caso en concreto no existen pruebas suficientes que den por acreditado un vicio en el consentimiento tal y como lo alega en su escrito demandatorio, partiendo del hecho que quien debe probar es la parte demandante.

Ahora bien, sobre la inversión de la carga de la prueba, como lo indica el artículo 167 del CGP y la Corte Constitucional en sentencia C-086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del citado artículo estableció en dicha oportunidad que *"solo atendiendo las situaciones particulares del caso, el juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias"*.

Así las cosas, se tiene que la Sra. MARIA CONSUELO MONTES DE ALZATE suscribió formulario de afiliación al RAIS en el año de 2005, momento para el cual, la obligación del fondo solo era la de brindar información y sería el afiliado quien determinaría a que fondo realizar sus aportes a pensión, información que se realizaba de forma verbal. Por lo que resulta desmedido exigir al Fondo privado que hubiere realizado una proyección pensional o imponer el deber de asesoría y buen consejo diferente al establecido en la ley cuando no se había impuesto esta exigencia en la normatividad vigente.

Por lo tanto, en el presente caso no es posible invertir la carga de la prueba y exigirle al fondo privado acreditar con documentos y proyecciones pensionales un debido asesoramiento pues seguramente para esa época no se exigía más allá de una simple información brindada por el asesor comercial, por lo que imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

Aunado a lo anterior, debe resaltarse que no es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el **principio de confianza legítima**, teniendo en cuenta que **el principio de legalidad y el debido proceso**, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

Me permito señalar que, del interrogatorio de parte, se pudo extraer que no existió un error de hecho sino de derecho, que tal como señala la Corte Constitucional en sentencia C – 993 de 2006, no vicia el consentimiento y por ende deberá tenerse como válida su afiliación al RAIS; el cual con el paso del tiempo fue subsanado, no solo por la voluntad que plasmó el demandante al momento de suscribir el formulario de afiliación, sino que su vocación de permanecer en el régimen privado se dio por un tiempo prolongado, y su inconformidad esta básicamente orientada al monto pensional que recibiría en Porvenir S.A y el que podría recibir en Colpensiones.

Aunado a lo anterior, es dable indicar que el afiliado ostentaba un deber de información que, de los hechos de la demanda, solo hasta el año 2020, se acercó a las instalaciones de las AFP a las cuales se encuentra afiliada y a las instalaciones de mi representada para consultar sobre su situación pensional.

Así mismo, cabe resaltar que la CSJ en sentencia SL 2810 de 2019 indico que se genera una afiliación tacita al guardar silencio ante eventuales incongruencias, lo cual sucede en el presente caso, puesto que el demandante, guardo silencio sobre lo que manifiesta fue omitido por la AFP demandada, a la cual, se encuentra actualmente afiliada.

Así mismo, se debe señalar que el demandante se encuentra inmersa dentro de la prohibición legal contemplada en el artículo 2 de la ley 797 de 2003, toda vez que elevó solicitud de traslado al RPM administrado por Colpensiones el 14 de enero de 2020, fecha para la cual contaba con 67 años, situación que imposibilita a mi

representada a tener a la accionante como afiliado al RPM, pues tal situación contravendría no solo disposiciones de carácter legal sino también se encontraría en contravención del Principio Constitucional de la Sostenibilidad Financiera del Sistema lo que acarrearía una descapitalización del fondo común administrado por COLPENSIONES.

Aunado a lo anterior, se tiene que la demandante al no contar con 15 años de cotizaciones para el 1° de abril de 1994, tal como se puede evidenciar de la documental que reposa en el expediente, pues para esta data contaba con un aproximado de 180 semanas; por lo que no quedaría otra alternativa sino la de concluir que la señora MARIA CONSUELO MONTES DE ALZATE se encuentra inmersa en la prohibición legal de traslado, por ende, resultaría a todas luces improcedente por parte de mi representada tener como afiliada a la demandante al RPM, salvaguardando el Principio Constitucional de SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA.

Conforme a lo anterior, el demandante en el presente caso no es beneficiaria del régimen de transición para proceder su traslado en cualquier tiempo como lo manifiestan las Sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010 y la SU 130 de 2013 al indicar que la única condición prevista que no exige un límite de tiempo a efectos de solicitar el traslado de régimen, es que el afiliado acredite que es beneficiario del régimen de transición al haber efectuado cotizaciones por 15 años con anterioridad al 1 de abril de 1994, por lo que no tenía una expectativa pensional y no se afectaron derechos adquiridos.

Ahora se debe de tener en cuenta el equilibrio financiero del sistema, para lo cual me permito se debe tener en cuenta lo indicado en sentencia SU-062 de 2010 en relación al estudio de rentabilidad; por medio del cual señala que el cálculo de rentabilidad es una operación tendiente a determinar si el afiliado que desea trasladarse del RAIS al RPM y que le faltaren menos de 10 años para pensionarse, cumpla con el requisito que señala que el ahorro realizado en el primero no debe ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media, y así poder establecer si procede o no el traslado de régimen, medida que se adopta en aras de proteger la sostenibilidad del sistema principio contemplado en el art. 48 de la constitución política.

Por último, Honorable Magistrados, es de tener en cuenta el principio de relatividad jurídica, toda vez que COLPENSIONES es un tercero en el acto jurídico que celebro el actor y el fondo privado, los actos jurídicos en principio tiene efectos inter partes, por lo cual independientemente de la decisión adoptada mi representada no puede ser favorecida ni perjudicada con la decisión adoptada.

Conforme a lo previamente expuesto, solicito respetuosamente a su honorable despacho revocar el fallo proferido en primera instancia y en su lugar absolver a Colpensiones de la totalidad de pretensiones incoadas en su contra.

Cordialmente,

  
**LAURA NATALIA GUERRERO VINCHIRA**  
**CC No. 1.014.208.534 de Bogotá**  
**T.P No. 305.872 del C.S de la J**